

3º Que la concesion del amparo por el motivo expresado, en nada afecta el derecho y aun el deber que tiene el Ejecutivo para no devolver los citados documentos y remitirlos desde luego á la autoridad judicial competente, no solo para que resuelva lo que toque á los intereses del fisco, sino para que proceda á lo que corresponda sobre la responsabilidad criminal que pueda haber por fraude de dichos documentos. Por las razones y fundamentos expuestos, se resuelve:

Que es de confirmarse y se confirma, la sentencia que en 9 del corriente pronunció el Juez 1º de Distrito de esta capital, en la parte que declara: que la Justicia Federal ampara y preteje á D. Antonio Escandon y Estrada, en contra de lo dispuesto por el Ministerio de Hacienda en su comunicacion de fecha 25 de Octubre de 1870, constante á fojas primera de estos autos.

Devuélvanse sus actuaciones al mismo Juez de Distrito con testimonio de este auto, para los efectos legales, publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así por mayoría de votos lo decretaron los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—(Firmados.—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*S. Guzman.*—*L. Velazquez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias. México, Marzo veintitres de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO.

Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Oaxaca por Tibureio Torres y Guillermo Castellanos, contra la sentencia del Gefe Político de la ciudad de Oaxaca, que condenó al primero de los quejosos á ocho años de presidio en el Castillo de San Juan de Ulúa, y al segundo á cuatro años de la misma pena y en el propio Castillo.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR
FISCAL.

Ciudadano Juez:

El ciudadano Lic. Isaac Cañas, como apoderado de Tibureio Torres y Guillermo Castellanos, se presenta agitando la secuela del juicio de amparo, que estos promovieron contra la sentencia del ciudadano Gefe Político del Centro, que condenó al primero á ocho y al segundo á cuatro años de presidio en el castillo de San Juan de Ulúa, como comprendidos en la Suprema circular de 12 de Marzo de 1861, declarada vigente por la de 18 de Abril del año pasado, en virtud de que el testimonio de personas respetables de esta sociedad bastante caracterizadas, como lo son, los ciudadanos José Manuel Suarez, Francisco Ogarrío, diputado al Congreso de la Union, Lic. José Esperon, propietario, y que ha desempeñado puestos públicos de categoría en el Estado, Manuel Diaz Ordaz, actual administrador del registro de granas y José María López, comandante de diurnos, aseguran que Tibureio Torres, es uno de los individuos que pertenecen á una sociedad de bandidos que con ganzuas han forzado puertas, y con escalas han asaltado casas, introduciéndose en ellas por la noche, y consumando robos escandalosos, como los de la casa de D^a Juliana Tamayo, que vive en la esquina de la Defensa, y la de D. Bernardo Berjes, que tambien fué saqueada. Estos mismos testigos declararon, que la fa-

ma pública condena ó señala á Guillermo Castellanos (á) Catalan, como ladrón perteneciente á la cuadrilla de Tiburcio Torres.

Alega el ciudadano Lic. Cañas, en defensa de sus poderdantes, que al aplicar el ciudadano Gefe Político la ley de 13 de Abril del año pasado, Torres y Castellanos, han sido castigados mediante efecto retroactivo que este funcionario dió á la ley, supuesto que los declaró comprendidos en una disposición que ha sido sancionada mucho tiempo después de la fecha en que se supone que sus clientes consumaron los robos de que se ha hecho mérito: que la mala fama no es un delito, ni mucho menos merecedora de castigos tan severos como los que impuso el ciudadano Gefe Político á los referidos Torres y Castellanos.

Por el escrito que presentó el expresado Cañas, con fecha 27 del mes pasado, amplía su queja, manifestando, que tratándose en la ley de 13 de Abril de 1869, y circular de 12 de Marzo de 1867, de salteadores y plagiarios, no están comprendidos sus representados en estas disposiciones, porque ni son plagiarios ni salteadores, sino simplemente reos de hurtos calificados si se quiere, y que dichos reos han sido juzgados y sentenciados por una autoridad incompetente, debiendo después de ampararlos, el ser consignados á los tribunales comunes, de manera que en resumidas cuentas, están violadas en las personas de Castellanos y Torres, según Cañas, las garantías que concede la Constitución federal en sus artículos 20 y 21, y primeras partes del 13 y 19.

Este Ministerio opina, que no hay tal efecto retroactivo en la aplicación de la ley de 13 de Abril referida, á Guillermo Castellanos y Tiburcio Torres, y que tampoco tienen derecho de quejarse de violación en los artículos 20 y 21, y primeras partes de los 13 y 19 de la Constitución federal.

El Sr. Cañas, al expresar como fundamento de su queja la violación de la primera parte del artículo 13 de la Constitución, confunde el procedimiento con la pena, ó

mas bien dicho, no hace ninguna distinción, y es precisamente en lo que consiste la fuerza del sofisma. Ni la ley de 13 de Abril del año pasado, ni la circular de 12 de Marzo de 67, hacen alteración de las leyes vigentes que tratan de ladrones y salteadores, en su parte penal, y toda su modificación no estriba en otra cosa mas, que en el procedimiento, en la manera de enjuiciar. En materia de procedimientos judiciales, es una regla establecida en derecho, que no se da el efecto retroactivo, y esto consiste en que los procedimientos judiciales por su naturaleza, no son ni pueden ser simultáneos, sino sucesivos, que pertenecen á lo pasado y á lo venidero, y que se componen de diferentes actos que se van ejecutando sucesivamente, y en diferentes intervalos: un delito, por ejemplo, comienza á ser juzgado con arreglo á los procedimientos de una ley; durante la secuela de un proceso, se sanciona otra que establece procedimientos sumarios mas violentos que la anterior: las actuaciones ejecutoriales antes de esta ley, no cabe duda que han quedado firmes y valideras, y tanta responsabilidad tendría la autoridad que juzga en reformar sus procedimientos ya ejecutoriados, ó mejor dicho, reformar el proceso con arreglo al nuevo procedimiento que estableciera la misma ley nueva que suponemos, como si continuara la causa sin sujetarla á los trámites mandados por esta. El ciudadano Gefe Político hizo muy bien en juzgar y castigar á Tiburcio Torres y á Guillermo Castellanos, con arreglo á la ley de 13 de Abril del año pasado, y suprema circular de 12 de Marzo de 1867 citadas, supuesto que estas disposiciones como dije antes, no hacen ninguna modificación á la pena que con anterioridad tienen impuesta las leyes á los responsables de los delitos de los que lo son Castellanos y Torres, sino solamente en cuanto al procedimiento. Sobre esto puede verse á Escribhe, adicionado por Guin, edición de 1852, página 596, número 6.

La prueba de fama pública, dice el apoderado de los reos, que es peligrosa, y que

algunas veces puede dar el mal resultado de entregar á un hombre de bien á la acción de la justicia, y hacerlo sufrir la pena de un delito que jamas ha cometido. Al infrascripto no le parece imposible el caso que supone el ciudadano Cañas; pero sí muy difícil; y tambien es necesario persuadirse que todas estas razones filosóficas, deben callarse ante los términos espresos de una ley, y que las autoridades están en el preciso deber de despreciar aquellas y acatar esta. Supuesto que la circular de 12 de Marzo de 61, dispone que basta la atestacion de dos individuos de notoria probidad, que aseguren la culpabilidad de un individuo, ya por la perpetracion de un robo, ó ya porque pertenezca á la banda de forajidos que exista en algun lugar, el ciudadano Gefe Político del Centro, no pudo dejar de hacer aplicacion de esta circular, en vista de las declaraciones de los ciudadanos Esperon, Suarez, Diaz y López.

Público y notorio es en esta ciudad, que despues de que la policía puso la mano sobre los acusados Torres y Castellanos, cesaron los diferentes robos que en distintas casas sucedieron: todo el vecindario de esta capital, conoce perfectamente quiénes son los autores de semejantes hechos: esto es un rumor constante y uniforme, y nadie dice lo contrario, y aún puede asegurarse sin temor de equivocarse, que el mismo ciudadano Cañas, defensor de estos criminales, en su conciencia siente lo mismo. Público y notorio es, que un dia amaneció forzada la pieza del despacho de D. Bernardo Berjes, comerciante acreditado en esta vecindad, lo mismo que su caja: que en las azoteas se encontraron las escalas con que pudieron asaltar la referida casa, y una talega de pesos que no pudieron llevarse, porque seguramente la luz de la mañana los sorprendió en sus criminales manejos. Estos no son ladrones rateros, ni reos de hurto cualificado, con cuyo juego de palabras, y haciendo la cuestion gramatical, ha podido Cañas con buen éxito defender á los reos ó criminales de esta clase. Para estos malhe-

chores, no basta la altura de las paredes, ni la complicacion de las serraduras de puertas y cajas, pues está visto que en esta ciudad se han podido verificar hechos criminales de este género, y todo revela la osadía y destreza de sus autores.

La suprema circular de 12 de Marzo de 61, declarada vigente por la ley de 13 de Abril del año pasado para salteadores y plagiarios, en concepto de este Ministerio, es aplicable á Tiburcio Torres y Guillermo Castellanos, pues tan saltador es el que roba en los caminos y en despoblado, como el que protegido por la oscuridad de la noche, asalta las paredes de una casa y con ganzuas abre las puertas y cajas con el mismo fin. En el idioma castellano ambos son salteadores, y cuando los criminales de un mismo género son igualmente peligrosos, y cuando estas leyes de circunstancias no tienen otro fin mas que dar seguridad á la sociedad, y proteger la propiedad de su clase pacífica, no cabe duda que su texto, estensivo á los salteadores de casas, á los ladrones nocturnos, y mucho mas cuanto que en la ley y circular citadas, no se hace ninguna distincion, sino que simplemente dice: "salteadores", en cuya frase pueden quedar comprendidos aun los criminales del género de Torres y Castellanos.

La palabra "saltear", en el Diccionario castellano de la última edicion, que es la de 1868, tiene diversas acepciones; significa, salir á los caminos y robar á los pasajeros, sorprender el ánimo con alguna impresion fuerte y viva, acometer, etc.; de manera, que la sorpresa en el robo es precisamente lo que constituye al saltador. ¿Y qué mayor sorpresa puede haber, que robar acometiendo á una persona cuando está durmiendo en el interior de su casa?

Las leyes de partida colocan en la misma categoría á los ladrones que roban en los caminos, que á los que lo hacen en las casas, y esto se comprende, porque aquellos legisladores, es muy natural que hayan tenido presente, que siendo la sorpresa ó el asalto, una circunstancia que agrava mu-

cho este delito, en todos los casos en que concurre la agresion y sorpresa, es muy natural quepa la misma pena. La ley 18 del tít. 14, Part. 7^a, dice así: "...mas por razon de furto non deben matar nin cortar miembro á ninguno, fuerase ende si fuese ladron conocido que manifestamente toviese caminos, ó que robase á otros en la mar con navíos armados, á quien dicen corsarios, ó si fuesen ladrones que oviesen entrado por fuerza en las casas, ó en los lugares dotri por robar con armas ó sin ellas, ó ladron que furtase de alguna eglefia ó de otro lugar religioso, etc."

Queda demostrado, que no hay retroactividad en la aplicacion que se ha hecho en la Gefatura política del Centro, de la ley de 13 de Abril del año pasado, y circular de 12 de Marzo de 1861, que ella misma declara vigente y que siendo salteadores Tiburcio Torres y Guillermo Castellanos, no existe la violacion de los artículos 20 y 21, y primeras partes del 13 y 19 de nuestra carta federal, por cuyos fundamentos, este Ministerio concluye pidiendo á Vd. que no ampare á los susodichos.

Oaxaca, Agosto ocho de mil ochocientos setenta.—*J. Luengas.*

Sentencia del Juez de Distrito.

Oaxaca, Marzo diez y seis de mil ochocientos setenta y uno.

Visto este juicio de amparo promovido por Tiburcio Torres y Guillermo Castellanos el 13 de Agosto de 869, residentes en el castillo de Ulúa y continuado por el Procurador de estos, ciudadano Lic. Jose Isaac Cañas contra el ciudadano Mariano Benavides, Gefe Político del Distrito del Centro, por violacion de garantías individuales: vistas las razones en que los solicitantes apoyan su demanda, así como los artículos 14 y 18 de la Constitucion federal, que dicen haberse violado en sus personas. Y considerando: que Tiburcio Torres y Gui-

llermo Castellanos no fueron aprehendidos inmediatamente á la perpetracion de su delito, sino que la autoridad política procedió en su contra de oficio, apoyándose nada mas que en la fama pública: Visto el informe justificado del ciudadano Gefe Político, en el que manifiesta que fundó sus procedimientos y sentencia en el espíritu de la suprema circular de 12 de Marzo de 1861, y leyes de 13 y 30 de Abril de 869. Considerando: que tanto las leyes como la circular citadas, no son aplicables al caso presente, porque se faltaria al artículo 14 de la Constitucion, dándoles á la circular y leyes mencionadas efecto retroactivo, supuesto que los hechos criminosos de aquellos, pasaron antes de la publicacion de esas leyes. Considerando: que imponiendo así estas, como la circular citada, en todo caso la pena de muerte, y no debiendo por ningun motivo entenderse que faculta á la autoridad para la imposicion de una arbitraria, el Gefe Político infringió no solo en su espíritu á la circular, sino en su tenor literal, porque supuesto el íntimo convencimiento de su conciencia, segun dice, de que Torres y Castellanos eran culpables, debió aplicarles la pena de muerte y no la de presidio. Considerando: que si bien es cierto que la circular marca los procedimientos que deben seguirse en los delitos de asalto, bastando la atestacion de dos personas idóneas y de conocida probidad para imponer la pena, esto debe entenderse en el caso de ser aprehendidos por la perpetracion reciente de un delito de robo, recayendo sobre los acusados fundadas sospechas, ó resultando justificado que ellos pertenecen á alguna banda de foragidos; circunstancias que no resultan probadas en las diligencias que practicó el Gefe Político. Considerando: que si bien las autoridades, y muy especialmente la política del lugar, tienen el imprescindible deber de perseguir á los malhechores, y de asegurar las vidas y los intereses de los ciudadanos; tambien tienen el de respetar los derechos del hombre, y de acatar la ley suprema que se los

garantiza, de donde precisamente procede la obligacion tanto del gobernante como del empleado subalterno, de sujetar sus actos en la aplicacion de las leyes, á su mas estricto tenor literal. Considerando: que en el sumario que formó el Gefe Político, se notan importantes omisiones que dan lugar á la duda, ya por no haber interrogado á los testigos con la debida escrupulosidad, estrechándolos á que marcasen con precision los hechos; ya en particular al alcaide para que fijara las fechas y determinara los delitos porque Torres estuviera preso, presentando los asientos de sus respectivos libros, ó ya pidiendo informes á los ciudadanos Jueces de esta ciudad, á fin de obtener datos seguros para basar sus procedimientos, y no conformarse, como se conformó, con las declaraciones de testigos de oídas, sin procurarlos por todos los medios que señalan las leyes y circular tantas veces citadas. Considerando que la razon que mas convence, y consta de los autos, de que el Gefe Político no ha quedado muy tranquilo en su conciencia, como lo dice en su informe, copiando las mismas palabras de la circular, es, que no aplicó la pena que ella señala, porque juzgó con la circular y falló á su arbitrio, pues de otra manera habria aplicado irremisiblemente la pena de muerte á los acusados; y si no se determinó, fué porque su conciencia lo persuadía, de la absoluta inocencia de los quejosos, ó al menos, de que no eran aplicables al caso las leyes y circular que él mismo cita. De todo lo cual se deduce, que el C. Gefe Político del Centro violó en las personas de Tiburcio Chavez Torres y Guillermo Castellanos, las garantías que otorgan los artículos 14 y 18 de la Constitucion general de la República. Y por lo que respecta al pedimento fiscal, el Juez que suscribe, no juzgando necesario ocuparse de las razones que el ciudadano Lic. Sebastian Luengas, Promotor Fiscal de la Federacion, espone en su pedimento de 8 de Agosto último, porque sus alegaciones para oponerse al amparo que se solicita, son las mismas aceptadas por el ciudadano

Gefe Político para proceder como procedió; y omitiendo por la limitacion de la ley hacer, primero: al ciudadano Promotor una prevencion por haber pedido contra derecho en algunas diligencias que se sucedieron en el presente juicio, por haberse olvidado de los deberes que le impone su sagrado ministerio, conviniéndose en el Procurador mas eficaz de las partes, y por haberse esforzado por cuantos medios estuvieron á su alcance, para dilatar la continuacion de este juicio: y segundo: dejar á salvo los derechos de las partes agraviadas, para reclamar de quienes convenga, los perjuicios que hubiesen sufrido: deja á la justificacion del Supremo Tribunal sobre tales puntos: Visto en conclusion el alegato de la parte actora, y fundado en el artículo 2º de la ley de 20 de Enero de 1869; La Justicia federal declara: que protege y ampara á Tiburcio Torres y Guillermo Castellanos, contra la providencia que dictó el Gefe Político del Centro, condenando al primero á ocho y al segundo á cuatro años de presidio en la fortaleza de Ulúa. Notifíquese á quienes corresponda, y en cumplimiento del artículo 27 de la ley antes citada, publíquese y remítase á la Suprema Corte de Justicia para su revision. El ciudadano Juez 8º suplente de Distrito, lo decretó y firmó.—Doy fé.—Julio Castellanos.—Juan Rey.

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Marzo veintiuno de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el Juzgado de Distrito de Oaxaca por el Lic. José Isaac Cañas, en representacion de Tiburcio Torres y Guillermo Castellanos, quejándose de los procedimientos de la Gefatura política del Centro de aquella ciu.

dad, en virtud de los cuales, sentenció á sus poderdantes; al primero, á cuatro años de presidio, y al segundo á ocho, cuya condena extinguen en la actualidad en la fortaleza de San Juan de Ulúa. Visto el informe justificado, rendido por la autoridad respectiva; el pedimento del Ministerio público, así como las constancias que obran en el expediente, y todo lo demás que ver convino. Considerando: que la Gefatura política del Centro, ha sometido á juicio y sentenciado á Torres y Castellanos, sin otro fundamento que el de la fama pública de haber cometido algunos delitos, y sin señalar hecho determinado. Considerando: que los delitos á que se refieren los testigos, en el proceso sumario mandado practicar por la Gefatura, son anteriores á la ley que ha normado las determinaciones de la autoridad ejecutora del acto. Considerando: que si los quejosos están acusados de algun delito, la autoridad tiene el deber imprescindible de consignarlos al Juez competente; resultando por consecuencia, que la Gefatura política del Centro ha violado con sus procedimientos las garantías que otorgan los artículos 14, 20 y 21 de la Constitución federal de la República. Con tales fundamentos, se declara:

Que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juzgado de Distrito de Oaxaca, que mandó en nombre de los Poderes de la Union, amparar y proteger á los quejosos contra la determinación de la Gefatura política del Centro de aquella ciudad, en virtud de la cual, fueron sentenciados á presidio en la fortaleza de Ulúa.

Devuélvase sus actuaciones al Juez remitente, con copia certificada de esta sentencia para los efectos consiguientes; publíquese por los periódicos y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por unanimidad de votos los ciudadanos Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—(Firmados.—

S. Lerdo de Tejada.—Pedro Ogazon.—Juan J. de la Garza.—José Artcaga.—J. M. Lafragua.—Ignacio Ramirez.—M. Auza.—S. Guzman.—M. Zavala.—José García Ramirez.—Luis M. Aguilar, secretario.

Son copias. México, Marzo veinticuatro de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta*, oficial mayor.

CRIMINAL.

Causa seguida ante el Juzgado de Distrito de San Luis Potosí, contra María Dominga Lozano, por moneda falsa.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR FISCAL.

Ciudadano Juez de Distrito:

El Promotor fiscal dice: que á pesar de la suma eficacia y diligencia que por ese Juzgado se ha tenido para aclarar el delito de circulacion de moneda falsa, porque se ha estado juzgando á Dominga Lozano, nada se ha conseguido, pues solo aparece que trataba de comprar á Rafael Gonzalez dos guitarras de á cuartilla, con el peso de cobre de los dos que se le recogieron. No se encontró en la casa de aquella mujer, ningunos útiles ni otros objetos con que pudiera creerse que fabricaba la moneda de cobre; tampoco está comprobado, que por el mismo delito haya estado presa anteriormente, pues segun asegura la rectora de Recogidas, en otras veces que ha sido reducida á prision, ha estado por distintos hechos. Por otra parte, ha sido imposible evacuar la cita hecha por Mateo Carlos de la mujer, que segun asegura en su declaración de fojas 7 vuelta, le manifestó, que la Lozano habia sido fiada por su esposo en dias anteriores y por el mismo delito.

Resulta de lo expuesto, que habiendo una